

El Frente Polisario también ha sido acusado de violaciones de derechos humanos, aunque los últimos supuestos abusos no están tan bien documentados por grupos independientes como los abusos cometidos por los marroquíes. Algunos de los que han hablado son los marroquíes que han sido atacados o detenidos por los partidarios del Polisario, así como desertores del Polisario que han huido de los campamentos de refugiados, temiendo por su seguridad. Estos desertores han alegado que el Frente Polisario reprime la disidencia y ha restringido la libre circulación de personas en los campamentos.



Los dirigentes del Polisario, en una señal de apertura y rendición de cuentas, han tomado la responsabilidad de ciertas violaciones de derechos humanos que ocurrieron en los campamentos en los años 1980 y 1990, muchos de los cuales estaban dirigidos contra los prisioneros de guerra marroquíes, quienes fueron encarcelados en condiciones difíciles que violaban los Convenios de Ginebra y otras normas internacionales. Los dirigentes también han reconocido los abusos cometidos en contra de algunos saharauis disidentes quienes se oponían al Frente Polisario. Sin embargo, estos abusos quedaron en gran medida en el

pasado. Hoy en día los campos de refugiados son el hogar de una sociedad muy abierta, incluyente y tolerante. El Frente Polisario se ha concentrado en mejorar la difícil situación de su pueblo y su imagen internacional, así como sus credenciales democráticas, y ha tomado medidas para garantizar que los derechos humanos en los campamentos estén garantizados. Estas medidas son orientadas hacia la erradicación del racismo, la capacitación en derechos humanos para oficiales militares y de policía y la bienvenida a periodistas y observadores internacionales a los campamentos.

Como se ha señalado por parte de Marruecos, los refugiados Saharauis siguen siendo restringidos en sus movimientos, pero las limitaciones se deben principalmente a factores logísticos y económicos. Fundamentalmente, sin pasaportes reconocidos internacionalmente, es extremadamente difícil que los saharauis viajen a países extranjeros. El muro militar de Marruecos de 1,600 millas (2,414 kilómetros) de largo, el cual está rodeado por un campo minado, hace el viajar a las ciudades del Sáhara Occidental casi imposible. Por último, como refugiados, los Saharauis no tienen los recursos financieros para moverse fuera de los campamentos.

Sin embargo, los saharauis se mueven libremente entre los cinco campamentos de refugiados, pasando fácilmente por los controles en cada entrada. Muchos saharauis también viajan la ciudad cercana de Tindouf, pasan semanas visitando a sus familias en Mauritania, viajan a España o Italia para estudiar o pasar los meses de verano agotador en el extranjero y pasan semanas o incluso meses en las tierras de pastoreo fuera de Tindouf para escapar del calor de verano en los campamentos. Los críticos, sin embargo, siguen alegando que los saharauis son mantenidos como prisioneros en los campamentos, prohibida su salida en grandes cantidades tanto por el Frente Polisario y por sus patrocinadores Argelinos. Al examinar estas acusaciones, sin embargo, es importante señalar que Marruecos, a través de la construcción de su muro militar y las minas plantadas por toda la frontera de facto entre el Sáhara Occidental ocupado y aquella controlada por el Polisario, ha levantado el obstáculo más importante a la libre circulación de personas en el área.

Por último, aunque no directamente relacionado con los derechos humanos, junto con las acusaciones de las limitaciones a la libertad de movimiento, el Frente Polisario es acusado de impedir un censo en los campamentos para determinar el número de refugiados que actualmente reside allí. Las estimaciones varían entre 40,000 y más de 200,000, mientras que muchos partidarios del Polisario creen que la población real es probablemente más cercana a 160,000. La prevención de un censo es una decisión estratégica por parte del Polisario, porque el número de votantes y soldados a disposición del movimiento independentista de los saharauis se considera un asunto de seguridad nacional.

